

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso especial de fuero sindical -reintegro- que inició **ALBERTO DE JESÚS CANO VANEGAS** en contra de **SEGURIDAD ATLAS LTDA.** (Radicado 05001-31-05-018-2019-00113-02).

ANTECEDENTES

Pretende la activa se declare que el despido efectuado por la parte empleadora se surtió aún bajo la garantía foral de la que es titular y, en consecuencia, se ordene su reintegro a un cargo de igual o superior categoría con el reconocimiento de todos los emolumentos laborales causados desde el finiquito y hasta la data de su reinstalación, además de las costas del proceso.

Tales aspiraciones las basó a partir de los siguientes fundamentos fácticos: Fue trabajador de la empresa demandada desde el 14 de octubre de 2014 y hasta el 01 de diciembre de 2018 cuando fue despedido sin justa causa en tanto contaba con la estabilidad laboral reforzada por fuero de fundadores debido a su afiliación el 21 de noviembre de 2018 al sindicato “SINSECOL” constituido el 08 de noviembre de 2018, la que fue comunicada a la empresa el 27 de noviembre de 2018. El 17 de enero de 2019 solicitó su reintegro, recibiendo respuesta negativa.

El Juzgado de Conocimiento, que lo es el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín admitió la demanda por auto del 01 de marzo de 2019, oportunidad en la que dispuso vincular como tercero coadyuvante a la organización sindical “SINSECOL” (Págs. 80-81 Archivo 01)

SEGURIDAD ATLAS LTDA. arrió pronunciamiento dentro del término de ley con oposición a las pretensiones por no existir prueba del amparo foral que se alega puesto que la afiliación se surtió luego de efectuado el registro sindical además de considerar la creación del sindicato “Sinsecol” una fachada que luego conllevó a su fusión con “Sintraviescols”, siendo adicionalmente inexistente la notificación correspondiente a esa condición del trabajador, concluyendo que el contrato terminó conforme a la facultad que asigna el artículo 64 del CST. Presentó como excepción previa la de pleito pendiente y de mérito formuló las que denominó inexistencia de fuero sindical, inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa del demandante, buena fe de la demandada, compensación e incumplimiento del deber probatorio.

La organización colectiva SINSECOL, fue fusionada con el sindicato “Sintraviescols” conforme a la probación surtida por acta de Asamblea de delegados del 20 de diciembre de 2019 (Pág. 2 Archivo 09), razón por la que esta última agremiación se pronunció aduciendo que no se haría parte del proceso por la inexistencia de Sinsecol para la actualidad, y que aun con esa fusión, deciden alejarse de los procesos que tengan referencia con ese Sindicato (Pág. 1 Archivo 09).

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia que profirió el 05 de mayo de 2023, DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de fuero sindical y ABSOLVIÓ a Seguridad Atlas Ltda. de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV.

La activa se apartó de dicha determinación enfatizando en la apreciación equivocada de las pruebas de parte de la falladora, porque asevera que se confunde el contenido de una documental que resulta determinante para el

asunto y que corresponde al acta de constitución de inscripción, el que no se equipara al registro sindical y por tanto no es posible tenerla como tal. Cuestiona que no se dé validez a la solicitud de afiliación y que se exija la comunicación al empleador sobre la garantía foral, pues considera desatinado tener que informar un asunto que ya era conocido, encontrando que la sola afiliación al sindicato debe generar una alerta en el patrono para definir su condición foral. Enfatizó en las diferentes etapas que surgen para el registro sindical sin que pueda realizarse una interpretación restrictiva de la norma que conllevaría a que el fuero tuviera una vigencia de cinco días, con la adición de no haberse tenido en cuenta que el actor se afilió a la organización sindical y a los cuatro días fue despedido sin justa causa.

CONSIDERACIONES:

Previo a resolver lo que corresponde, importa poner de presente que se encuentran por fuera de discusión en esta instancia, los siguientes presupuestos fácticos: Alberto de Jesús Cano Vanegas fue vinculado al servicio de Seguridad Atlas Ltda. a partir del 15 de octubre de 2014 (Págs. 31-32 Archivo 01 y Archivo 05) desempeñándose como “*guarda de seguridad*” (Págs. 30 y 46 archivo 01), lo que ocurrió hasta el 01 de diciembre de 2018 cuando fue despedido sin justa causa (Pág. 45 Archivo 01). Se encontraba afiliado a Sinsecol desde el 21 de noviembre de 2018 (Pág. 44 Archivo 01), organización que para diciembre de 2019 fue fusionada con “sintraviescols” (Archivo 08).

Bajo tales condiciones, corresponde a la Sala determinar si para la data de terminación del contrato de trabajo, el demandante ostentaba fuero sindical que impidiera su despido sin intervención del Juez de trabajo y por consiguiente, si es viable el reintegro pretendido.

Para decidir, es prudente memorar que el derecho de asociación sindical se ha reconocido en la legislación interna como una prerrogativa de las personas que ejercen una actividad productiva y a la par desean abanderar causas y propósitos de organizaciones colectivas de trabajadores. Y para garantizar

que se ejerza sin ninguna discriminación o talanquera, el propio legislador, ha consagrado protecciones como el denominado fuero sindical.

Esa protección cuyo origen es la propia Constitución Política (artículo 39 Superior), y el denominado bloque de constitucionalidad (artículo 11 del Convenio 87 de la OIT, ratificado por Colombia), es definida por el artículo 405 del CST, disposición de la que se colige que los trabajadores amparados por fuero sindical, no pueden ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de labor, a menos de que exista una justa causa, que previamente debe ser calificada por un juez de la república, precisamente a través del procedimiento que regulan los artículos 113 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Es el contexto de las normas citadas, el que permite aseverar que la garantía foral es un derecho con doble dimensión: de un lado es exigible por el trabajador que cumpla las condiciones del artículo 406, como una forma de estabilidad reforzada en el empleo, pero de otro, siendo este el más importante, protege a las organizaciones sindicales, pues al depender el despido de aforados de una calificación previa de la jurisdicción sobre el asunto, se logra verificar si la decisión del empleador ocurre o no con miras a debilitar la unión colectiva o a discriminar a quienes son sindicalizados, lo que a todas luces se encuentra prohibido (Ver sentencias C-381 de 2000, T-606 de 2017 y T-338 de 2019).

Es el propio artículo 406 del CST, el que enlista los trabajadores amparados por esta garantía constitucional, dentro de los que se encuentran: *“a) los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses; y b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores”*.

En ese orden, el Derecho Colectivo del Trabajo, prevé la existencia de distintas maneras de llevar a efecto la protección a la asociación sindical,

garantizando a los trabajadores la estabilidad laboral, a través de la conservación y mantenimiento de su puesto de trabajo, sin variación de las condiciones o del sitio o lugar en que este se realiza, surgiendo el fuero para los fundadores de la asociación sindical a partir de la fecha de la asamblea constitutiva del mismo, por el solo hecho de su constitución; y para los trabajadores que se adhieran a él antes de su inscripción en el registro sindical, dentro de los tiempos ya anotados en la norma.

No sobra decir que existen reglas claras y precisas que las partes deben y tienen que cumplir o propender porque se cumplan, si aspiran a que sus peticiones sean reconocidas. Entre las más relevantes deben traerse a colación las establecidas en los artículos 164 y 167 del C.G. del P. (Ley 1564 de 2012) aplicables por analogía al procedimiento laboral, las mismas que consagran el principio de la necesidad de la prueba y la regla de la carga de la prueba, respectivamente.

De ahí que el actor tenía la carga de demostrar su condición de aforado para efectos de materializar la efectividad del derecho de asociación por medio de su protección, encontrando que contrario a lo concluido por la Juez de Instancia tal condición si existía para la data del despido.

Y es que bajo el primero de los postulados, se tiene que el Presidente de “Sinsecol” dirigió a Seguridad Atlas Ltda. una comunicación que data del 16 de noviembre de 2018, donde radica la documental relativa a la creación de la organización sindical en Asamblea de constitución realizada el 08 de noviembre de 2018, enlista los nombres de las personas que integran la Junta Directiva, y adicionalmente, anexa un “*formato constancia de registro del acta de constitución de una nueva organización sindical*” donde se ratifica esa información y se detallan los 53 constituyentes de la organización (Págs. 33-42) donde no figura el nombre del actor, ni existe otra probanza idónea que de cuenta que haya participado en la creación de la agrupación, ilustración suficiente para desechar esta posibilidad.

Pero sobre la segunda hipótesis, es necesario acotar que, pese a que los sindicatos cuentan con personería jurídica desde el acta de constitución

elevada en la respectiva Asamblea, para que sus actos puedan tener efectos jurídicos frente al empleador y frente a terceros, deberán inscribir la asociación ante el Ministerio del Trabajo con fines de publicidad.

Es así como los artículos 365 y 366 del CST regulan el procedimiento para lograr el registro sindical, el que debe iniciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la asamblea ante el Ministerio del Trabajo con anexo de la documental necesaria, y una vez recibida la solicitud, esta autoridad dispone de quince (15) días hábiles para admitir, formular objeciones o negar la inscripción. Si la solicitud no reúne requisitos el Ministerio formulará las correcciones y una vez presentada la petición subsanada contará con el término de diez (10) días hábiles para pronunciarse, tiempos de ley que una vez vencidos sin verificarse resolución al respecto se entenderá inscrita la organización automáticamente.

A partir de tales disposiciones y en virtud de su interpretación conjunta, debe entenderse que con la entrega de la documental al Ministerio, se inicia la gestión del registro de la nueva asociación, quedando pendiente de las objeciones o correcciones a realizar para su admisión y por tanto, de su materialización o aprobación por parte del Ministerio, a partir de lo que no es posible colegir que la inscripción se traduzca en el mero acto de solicitud de la misma, pues lo que el contenido normativo revela es que para que ese acto se surta deben dejarse transcurrir los términos dispuestos por la ley para que el Ministerio revise la acreditación de los requisitos y una vez ellos vencidos, emita su decisión por medio de acto administrativo que debe ser publicado según lo pregonan los artículos 367 y 368 del CST, o se dé lugar al silencio administrativo positivo con entendimiento de la aprobación de la mentada inscripción.

De tal modo, para esta Sala emerge necesario que para que se dé la inscripción en el registro sindical debe quedar consignada formalmente en un acto administrativo proveniente del Ministerio del Trabajo, o han de avanzar los tiempos dispuestos por el legislador para que se imparta la inscripción de manera automática por ausencia de pronunciamiento de la autoridad pública.

Bajo esa reflexión, carece de sentido que el fuero por adherencia solo se presente como lo concluyó la *a quo* entre el momento en que se constituye el sindicato y hasta cuando se radica la solicitud de inscripción, pues ello supondría como lo condujo la activa, un amparo foral por los cinco (5) días que impone el artículo 365 del CST que están destinados es a limitar el tiempo para el inicio del trámite de registro, y desconocería el lapso de la gestión que debe desplegar el ministerio para adoptar una decisión final. Ello significa que, el fuero del literal b) del artículo 406 del CST parte no de la solicitud sino de la inscripción en el libro de registro por parte del Ministerio de Trabajo, por lo que si el ingreso al sindicato se da previo a esa data, el trabajador se encuentra amparado por el fuero sindical hasta dos (2) meses después de esa inscripción y por un máximo de seis (6) meses.

Lo visto implica que, como quiera que “*Sinsecol*” fue creado el 08 de noviembre de 2018, radicándose el acta de constitución y la solicitud de registro el 14 de noviembre de 2018 (Pág. 37-42 Archivo 01), con posterior afiliación del actor al mencionado sindicato el 21 de noviembre de 2018 (Págs. 43 y 44 Archivo 01) para cuando no se verifica resolución de parte de la cartera ministerial ni se habían cumplido los términos para que operara el silencio administrativo, se verifica la existencia de una garantía foral por adherirse el demandante a la organización antes de su inscripción.

Ahora, esa protección se hace efectiva siempre y cuando se comunique a la empresa tales actos, para que con evaluación de la regulación respectiva, tenga en consideración la condición del trabajador para el momento de su finiquito. En este caso, la constitución de la organización se comunicó a la demandada el 16 de noviembre de 2018 (Págs. 33-42 Archivo 01) que corroboró la representante legal en su interrogatorio, con información expresa de los fundadores que contaban con garantía foral y los trabajadores que hacían parte de la junta directiva; y para el 27 de noviembre de 2018 obra otra comunicación recibida por la sociedad, contentiva de la solicitud de afiliación del actor (Pág. 43 Archivo 01), la que si bien pudiera decirse no se trata de una notificación formal a su empleador en tanto es un escrito dirigido al sindicato, de allí Seguridad Atlas Ltda. advirtió que el actor estaba gestionando su afiliación a tal organización, donde ha bastado la sola condición de observar

los estatutos de las mismas para ser miembro y donde firma “*quien afilió*”, sin demostrarse en este trámite que los reglamentos de Sinsecol impusieran alguna condición que no dejen a la discreción absoluta e inmotivada de los afiliados la posibilidad de acceder a él, que permitiera generar un asomo de duda sobre ese ingreso al grupo gremial que en el mismo mes se fundó y comunicó su constitución, no siendo viable atribuir un desconocimiento de la afiliación al sindicato por no verificarse descuentos por nómina de la cuota sindical como es aducido por la demandada, ya que de la afiliación se avisó como se ha dicho, el 27 de noviembre de 2018 y el despido ocurrió el 01 de diciembre de 2018, por lo que se trata de un hecho que no da lugar a esa apreciación.

Es a partir de lo anterior que, el fuero se encuentra demostrado no solo por hallarse el demandante al momento del fenecimiento del vínculo en la posición de trabajador adherente según se expuso, sino porque el empleador tenía conocimiento del acto de constitución del sindicato, y de solicitud de registro sindical, de donde era de suyo desprender acorde a la normativa adjetiva laboral, el amparo del que era sujeto el accionante por cuenta del literal b) del ya plurimentado artículo 406 del CST, sin que resultara imperativo que el trabajador le hiciera saber de manera expresa su condición foral para beneficiarse de esa garantía.

Tal conclusión no sufre modificación por el argumento que expone la enjuiciada, en cuanto aduce que la creación de Sinsecol obedeció a una “*fachada*”, porque si bien es cierto que luego de pasado poco más de un año se procuró su fusión con Sintraviescols (Archivo 08), a la que según los comprobantes de nómina aportados en este trámite también el actor se encontraba afiliado, no resultan ser suficientes los medios de convicción para atribuir en esa constitución un abuso del derecho a la asociación sindical, y aunque bajo ese fundamento se promovió para mayo de 2019 un proceso especial de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical que correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Cali (Archivos 18 y 19), se trata de un proceso en trámite conforme se desprende

del portal de consulta de procesos dispuesto por la Rama Judicial¹, sin que ello impida la continuidad de este litigio como se pregonó al momento de decidir la excepción previa de pleito pendiente (Archivo 26), no contándose con las herramientas y vestigios que permitan restar validez al acta de constitución y que derruyan todas las anteriores consideraciones, ni se aprecia además demostrada una causa legal y objetiva para la determinación de despido que apareció a solo escasos tres (3) días de haberse informado la afiliación del actor a la agremiación, por lo que pese a estar en el contexto de su desaparición para diciembre de 2019, puede exhibirse que la protección constitucional cumple su propósito a fin de que no se afecte la acción de los sindicatos.

A partir de lo analizado, esta Sala considera que en virtud a la garantía foral que cubría al actor el 01 de diciembre de 2018 para cuando fue terminado su contrato de trabajo, es que se impone la revocatoria de la sentencia apelada, para en su lugar ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando o superior, con el correlativo reconocimiento de los rubros laborales y de la seguridad social, causados entre el 01 de diciembre de 2018 y hasta su efectiva reincorporación.

Conforme lo predica el artículo 365-4 del CGP, las costas de ambas instancias estarán a cargo de la demandada; en esta sede, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$2.500.000.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA**, la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, para en su lugar, **DECLARAR** que el despido del actor ocurrió estando amparado por la garantía foral regulada en el literal b) del artículo 406 del CST, y **ORDENAR** el reintegro de Alberto de Jesús Cano Vanegas a Seguridad Atlas Ltda. en el mismo o superior cargo, con el

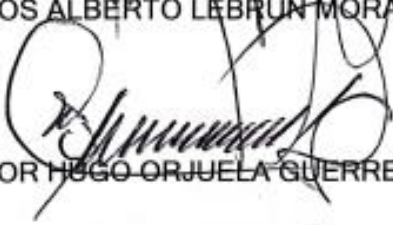
¹ 76001-31-05-016-2019-00253-00

correlativo reconocimiento de los conceptos laborales y de la seguridad social causados desde el momento del despido y hasta cuando se haga efectiva la reincorporación. Las costas serán como quedó dicho en la parte motiva.


Notifíquese por Edicto.



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501820190011302
Proceso: FUERO SINDICAL
Demandante: ALBERTO DE JESUS CANO VANEGAS
Demandado: SEGURIDAD ATLAS LTDA
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 12/05/2023
Decisión: REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 15/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario